

Fecha: 04-02-2026  
 Medio: Diario Financiero  
 Supl.: Diario Financiero  
 Tipo: Columnas de Opinión

Pág.: 14  
 Cm2: 243,7  
 VPE: \$ 2.159.369

Tiraje: 16.150  
 Lectoría: 48.450  
 Favorabilidad: ☐ No Definida

Título: Columnas de Opinión: Sociedad civil y emergencias: los primeros en actuar, pero los últimos en la fila

## Sociedad civil y emergencias: los primeros en actuar, pero los últimos en la fila

Chile enfrenta una paradoja difícil de ignorar, pues en un país marcado por incendios forestales, terremotos e inundaciones, las organizaciones de la sociedad civil suelen ser las primeras en actuar cuando ocurre una catástrofe -movilizan redes, apoyan a comunidades y coordinan ayuda en terreno-, sin embargo, según un estudio elaborado por el Centro de Políticas Públicas UC, apenas un 0,3% de aquellas entidades mapeadas se dedica a “responder a emergencias”. En un territorio estructuralmente expuesto al riesgo, esta brecha no es solo social, es institucional y estratégica.

El aumento en la recurrencia e intensidad de los incendios forestales confirma que no estamos frente a eventos excepcionales, sino ante un riesgo permanente. Aun así, Chile continúa abordando el problema principalmente desde la emergencia, sin incorporar el peligro de incendios de manera explícita en la planificación urbana y territorial. Esta omisión es particularmente grave en las zonas de interfaz urbano-rural, donde confluyen áreas habitadas con suelos agrícolas o forestales, pues aunque representan cerca del 5% del territorio nacional, concentran



**MARTÍN ANDRADE**  
 DIRECTOR EJECUTIVO  
 DE CORPORACIÓN  
 CIUDADES

**“Persistir en un enfoque centrado en la reacción, en maquinarias, brigadas o tecnología, mientras se deja fuera a la sociedad civil es financieramente ineficiente y socialmente insostenible”.**

alrededor del 60% de los incendios forestales.

Pese a ello, no existen normas claras que regulen el crecimiento urbano en estas zonas, la localización de equipamientos críticos o los estándares mínimos de protección frente al

fuego. El resultado es una expansión urbana que internaliza el riesgo, expone infraestructura esencial y eleva los costos económicos y sociales de cada desastre.

Hoy, más de un millón y medio de personas viven en zonas de alta recurrencia de incendios y en comunas como Penco esa exposición alcanza a cerca del 90% de la población.

La colaboración público-privada, la educación y el trabajo articulado desde la sociedad civil es lo que hace la diferencia. Existen experiencias que muestran que esta aproximación es posible, como el trabajo de la agrupación Canal Chacao, en la Región de Valparaíso. En el marco de una alianza entre Conaf y Cáritas, durante 2023 se desarrollaron capacitaciones en ocho comunidades de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, promoviendo acciones concretas como desmalezado, retiro de material combustible, coordinación comunitaria y articulación con actores estratégicos. Estas iniciativas fortalecieron capacidades locales y redujeron el riesgo antes de que ocurriera la emergencia.

El desafío es escalar estas experiencias y convertirlas en política pública; incorporar el riesgo

de incendios forestales en los instrumentos de planificación territorial; establecer exigencias normativas para zonas de interfaz; crear incentivos para la prevención comunitaria; y fortalecer a la sociedad civil como actor permanente, no solo reactivo. Se trata de medidas clave para una estrategia moderna de gestión del riesgo que puede marcar la diferencia.

Persistir en un enfoque centrado solo en la reacción, en maquinarias, brigadas o tecnología, y dejar fuera a la sociedad civil es financieramente ineficiente y socialmente insostenible.

La reciente aprobación de la Ley de Incendios en el Senado abre una oportunidad para corregir este rumbo, pero su impacto dependerá de cuánto logre fortalecer la prevención territorial y el trabajo comunitario.

La reconstrucción de Santa Olga tras los incendios de 2017 lo evidencia, donde una localidad de 5 mil habitantes requirió una inversión cercana a US\$ 65 millones, con entre 30% y 35% de aporte privado, además de US\$ 5 millones en cooperación internacional.

Anticiparse cuesta menos que reconstruir ciudades después del desastre.